



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintiuno de octubre de dos mil veintidós

18-174

Proceso: **APELA SENTENCIA**
Demandante: **KAREN OSPINA RAMIREZ Y OTROS**
Demandados: **ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL
HOGAR INFANTIL CAPERUCITA -INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR**
Llamado en garantía: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA:**
Radicado No.: **05001-31-05-021-2015-01306-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

Conforme memorial allegado con el escrito de alegatos se reconoce personería para representar los intereses del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR al abogado OSCAR BERNARDO VASQUEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.615.881 y portador de la tarjeta profesional número 100.951 del Consejo Superior de la Judicatura conforme poder otorgado por SELMA PATRICIA ROLDÁN TIRADO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.083.524, actuando en calidad de Directora de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según Resolución 10625 del 11 de octubre de 2016, emanada de la Dirección General del ICBF.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 031** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1.LO PRETENDIDO

Pretenden las demandantes **KAREN PAOLA OSPINA RAMÍREZ, GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ZAPATA, MARÍA EUGENIA ZAPATA CASTRO, MÓNICA MARÍA HERRERA ORTIZ, LUZ MARÍA RESTREPO RAVE, MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ OSSA, SANDRA CRISTINA ZAPATA RAMÍREZ Y GABRIELA DE JESÚS GALLEGU ORREGO** que tras declarar que entre ellas y la **ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA** se celebró un contrato de trabajo a término fijo, periodo inicial tuvo como extremos temporales el 16 de enero del dos mil 2014 hasta el treinta y 31 de julio de 2014, los cuales se prorrogaron por un periodo igual al inicialmente pactado y que se declare que el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF** es solidariamente responsable de las obligaciones laborales derivadas de dichos contratos, se condene de forma solidaria a los demandados a reconocer y pagar a favor de las demandantes: los salarios adeudados desde el 16 de julio del 2014 al 30 de septiembre del 2014, las cesantías causadas del inicio de la relación laboral contractual hasta el 30 de septiembre del 2014, los intereses a las cesantías causadas desde el inicio de la relación contractual hasta el 30 de septiembre del 2014, la sanción por él no pago de los intereses a las cesantías, las vacaciones causadas desde el inicio de la relación laboral hasta el 30 de septiembre del 2014, la prima de servicios causados entre el 1° de julio del 2014 y el 30 de septiembre del 2014, los aportes a la seguridad social salud y pensión, la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria por el pago de los salarios y prestaciones sociales, la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que el Gobierno Nacional implementó un programa a nivel nacional para la protección de la infancia denominado DE CERO A SIEMPRE, el cual es dirigido por el INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR, para lo cual, el ICBF está facultado legalmente para contratar a terceros, para que estos sean operadores de los servicios por los cuales se desarrolla el objeto del programa.
- Que en el municipio de Guarne para el desarrollo del aludido programa el ICBF delegó la operación a la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA, sin embargo, el ICBF en cumplimiento de sus obligaciones legales ejercía control y vigilancia directa sobre las asociaciones y los empleados tales como control técnico control de familia, control de emergencias y control de talento humano.
- Que para el desarrollo del convenio celebrado entre las demandadas, la asociación requería auxiliares administrativas, auxiliares de servicios generales, auxiliar pedagógico, auxiliar

pedagógico medio tiempo, coordinadora y directora, coordinadora pedagógica, docente y/o jardinera, gestora de enlace, manipuladora de alimentos, profesional en apoyo en nutrición, profesional en apoyo psicosocial y profesional apoyo salud y nutrición.

- Que en virtud de lo anterior la asociación demandada, en calidad de empleadora suscribió contrato de trabajo con las demandantes a término definido estipulando como fecha de inicio el 16 enero de 2014 y como fecha de terminación el 31 de julio de 2014, para desempeñar los siguientes cargos y con los salarios que se describen:

Demandante	Cargo	Salario
GABRIELA DE JESUS GALLEGU ORREGO	Manipuladora de alimentos	\$616.000
MARÍA EUGENIA ZAPATA CASTRO	Docente y/o jardinera	\$917.000
MÓNICA MARÍA HERRERA ORTIZ	Docente y/o jardinera	\$917.000
LUZ MARÍA RESTREPO RAVE	Auxiliar administrativo	\$917.000
MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ OSSA	Auxiliar de servicios generales	\$616.000
SANDRA CRISTINA ZAPATA RAMÍREZ	Docente y/o jardinera	\$917.000
GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ZAPATA	Manipuladora de alimentos	\$616.000
KAREN PAOLA OSPINA RAMÍREZ	Profesional en apoyo en salud y nutrición	\$1.030.000

- Que la labor prestada se hacía de manera personal y bajo continuada subordinación, en un horario de 7:30 am a 5:30 p.m.
- Que los contratos de trabajo de las demandantes se prorrogaron por un período igual al inicialmente pactado, pues si bien el empleador les había enviado unas cartas de terminación de contrato con la antelación exigida, después les informó que continuarían laborando, dejando sin efecto la terminación del contrato aludida, lo cual fue avalado por funcionarios del bienestar familiar.
- Que durante la ejecución de la prórroga contractual mencionada, en el mes de agosto de 2014, la Asociación entregó a las demandantes una carta de prórroga del contrato solo por dos meses, la cual tenía como fecha de la elaboración el 31 de julio 2014, por lo cual al contrato ya estar prorrogado no surte efectos.
- Que la asociación de padres de los niños usuarios del hogar Caperucita cesó en los pagos de salarios y prestaciones sociales a partir del 16 de julio del 2014.
- Que el 26 de agosto 2014 les fue entregado cartas de terminación del contrato de trabajo invocando como causa la disolución de la empresa, por lo que el contrato se terminó el 30 de septiembre 2014.
- Que a la fecha de presentación de la demanda ni el operador ni el ICBF han cancelado los salarios y prestaciones sociales adeudadas.
- Que el 24 de noviembre de 2014 presentaron reclamación administrativa ante el ICBF seccional Antioquia mediante la cual se solicita el reconocimiento y pago de los derechos laborales adeudados.

- Que la personería jurídica de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR CAPERUCITA la reconoció el ICBF según resolución número 1786 de 28 de junio de 1988, como entidad sin ánimo de lucro vinculada al sistema nacional de bienestar familiar del ICBF

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. RESPUESTA DEL INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones aclarando que de conformidad con la Ley 7° de 1989, el Decreto 2150 de 1995 y el artículo 127 del Decreto 2388 de 1979 el ICBF podrá celebrar contratos de Aporte para el cumplimiento de sus funciones, a través de los cuales, se obliga a proveer a una institución de los bienes indispensables para la prestación del servicio que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de institución, con personal de su dependencia y de acuerdo con las normas y control del ICBF, por tanto de acuerdo con la normatividad que rige estos contratos para la operación de sus programas misionales están regidos por una cláusula de indemnidad del ICBF, según la cual las partes se obligan a mantener indemne al ICBF contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse durante la ejecución del objeto contractual, así como contienen una cláusula de autonomía laboral, la cual obliga al Operador a ejecutar el contrato con absoluta autonomía e independencia y en desarrollo del mismo no se genera vínculo laboral alguno entre el ICBF y el Operador o sus dependientes, subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo. Por lo que aclaró que lo celebrado con la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA fue un contrato de Aporte en desarrollo del programa de CERO A SIEMPRE para la atención a la primera infancia, por lo que se desconoce los contratos que realizó la asociación con las demandantes, ya que en virtud del contrato de aporte existe total independencia para los contratista, por lo que tampoco le constan los demás hechos de la demanda por referirse a un tercero.

1.3.2. RESPUESTA DEL CURADOR AD LITEM DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA.

Se opuso a la popularidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos indicó que ninguno le constaba por lo que deberían ser objeto de debate probatorio.

1.3.3. RESPUESTA DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

La entidad llamada en garantía, presentó oposición frente a las pretensiones dirigidas a declarar la solidaridad con el ICBF, por no tener sustento jurídico, sin que sea posible predicar solidaridad con base en el artículo 34 del CST entre el ICBF y las entidades receptoras de recursos para la promoción de la educación de la niñez. En cuanto a los hechos señaló que no le constan por no ser parte en la relación contractual de la que aducen haber hecho parte las demandantes o que se trata de apreciaciones jurídicas por lo que deberán ser objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2018, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín tras DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a término fijo entre la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA y las demandantes GABRIELA DE JESÚS GALLEGO ORREGO, GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ZAPATA, MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ OSSA, MARÍA EUGENIA ZAPATA CASTRO, MÓNICA MARÍA HERRERA ORTIZ, SANDRA CRISTINA ZAPATA RAMÍREZ, LUZ MARÍA RESTREPO RAVE Y KAREN PAOLA OSPINA RAMÍREZ desde el 16 de enero de 2014 hasta el 31 de julio 2014 y que se prorrogó automáticamente hasta el 15 de febrero de 2015, el cual terminó sin justa causa imputable al empleador el 20 de octubre de 2014, CONDENÓ a la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA a reconocer y pagar a cada una de las demandantes:

- los salarios del 1º de agosto de 2014 al 20 de octubre de 2014
- las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por todo el tiempo laborado desde el 16 de enero de 2014 al 20 de octubre de 2014
- prima de servicios proporcional por el segundo semestre de 2014, del 1º de julio al 20 de octubre de 2014.
- indemnización por despido injusto, calculada del 21 de octubre de 2014 al 15 de febrero de 2015
- aportes a seguridad social del 16 de enero de 2014 al 20 de octubre de 2014
- la sanción moratoria del artículo 65 del CST
- la sanción por el no pago de interés a las cesantías

De otro lado DECLARÓ al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF como responsable solidario por los salarios, prestaciones sociales, indemnización por despido injusto y aportes a la seguridad sociales que fueron reconocidas a las demandantes, por lo que CONDENÓ a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA a reconocer y pagar al ICBF las sumas a las que fue condenado por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones, sin superar el límite de cobertura contemplado en las pólizas, que sustentaron su llamado en garantía.

Finalmente condenó en costas al ICBF y a la Asociación. Para el ICBF solidariamente con la Asociación sobre el 10% de las sumas a su cargo. Para la Asociación, además el 10% de las sumas reconocidas por concepto de sanciones moratorias.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Estimó que conforme las pruebas allegadas al proceso se encontraba debidamente acreditado que entre la demandada ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA y las demandantes existió un contrato de trabajo a término fijo entre el 16 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2014, el cual se prorrogó por un periodo igual al inicialmente pactado, es decir, hasta el 15 de febrero de 2015, toda vez que no se realizó un preaviso con 30 días de anticipación, conforme al artículo 46 del CST, pues la carta donde se les indica que se solo se haría una prórroga de dos meses tiene fecha del 31 de julio de 2014 y ni siquiera tiene fecha de recibido, por lo que se presume que se entregó en esta fecha o en una posterior.

De otro lado indicó que conforme los interrogatorios y la prueba testimonial podía concluirse que las demandantes laboraron hasta el 20 de octubre de 2014 y que les pagaron todo hasta el 31 de julio de 2014, incluida la prima del primer semestre de 2014, por tanto se les adeudan 79 días de salario, así como cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por todo el tiempo laborado, la prima proporcional por el segundo semestre de 2014, la indemnización por despido injusto,, los aportes a pago de pensión que no se hayan cancelado durante la vigencia del contrato de trabajo, así como la sanción por no pago de intereses a las cesantías y sanción moratoria por no pago de prestaciones sociales a la finalización del vínculo laboral dado que se acreditó la mala fe del empleador pues recibió los dineros del ICBF para el pago de los salarios a las demandantes y a pesar de ello omitió el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

En cuanto a la responsabilidad solidaria del ICBF estimó que conforme el art 127 del Decreto 2388 si bien establece la exclusiva responsabilidad de la asociación en relación con las obligaciones contractuales, también es cierto que consagra que el ICBF tiene el control sobre esas actividades, por lo que consideró que si bien se estableció una responsabilidad de la Asociación demandada en el no pago de salarios y prestaciones no se puede hablar, so pena de un contra sentido, que exista un control por parte del ICBF pero a pesar de ello no asuma ninguna responsabilidad en relación con el inadecuado manejo de ese tipo de contratos, ese ejercicio de control que se le impone al ICBF implica unas obligaciones en desarrollo del contrato, en este caso un contrato de aportes y

relacionadas con el deficiente desarrollo del mismo e indudablemente lo hacen responsable. Además, indicó que también se predica que el ICBF es solidariamente responsable en calidad de dueño de la obra en los términos del artículo 34 del CST, dado que las actividades desarrolladas por la ASOCIACIÓN no eran extrañas a sus fines misionales. Por tanto condenó al ICBF a responder solidariamente por los conceptos adeudados a las demandantes con excepción de la sanción por no pago de intereses a las cesantías y la sanción moratoria, por cuanto estas requieren la demostración de la mala fe y esta no puede predicarse del ICBF.

Finalmente consideró que debía condenarse a la llamada en garantía SEGUROS GENERAL SURAMERICANA a pagar a favor del ICBF las sumas a las que fue condenada en este proceso, las cuales no podrán superar el límite de las pólizas constituidas en favor del ICBF.

2.2.APELACIÓN DEL DEMANDANTE

Manifiesta que no está de acuerdo con que la sanción moratoria no se haya extendido en forma solidaria al ICBF, dado que la mala fe debe ser demostrada es por parte del empleador directo como quedó debidamente acreditado en el proceso y no de quién entra a ser parte de la solidaridad, o sea, del ICBF, por lo que solicita que se condene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a responder solidariamente por la totalidad de las condenas y las declaraciones realizadas en esta sentencia.

De otro lado indica que si bien el a quo tomó en cuenta la declaración de la testigo Amanda Elena Arboleda, para determinar que el último pago efectuado fue el 31 de julio del 2014, debe analizarse lo indicado por las demás testigos y demandantes donde todas tenían claridad que el último pago fue el 15 de julio de 2014, por lo que les quedaron adeudado esta quincena que les restaba para terminar el término del contrato anterior a la prórroga, por tanto señala que podría mirarse como prueba documental se pudieron haber aportado historias laborales o de pronto extractos bancarios de algunas de las demandantes, por lo que sería bueno que tribunal de manera oficiosa solicitase esta prueba para darle claridad al proceso y fallar acorde a la realidad.

2.3.ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2.3.1. ALEGATOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Manifestó que debe revocarse la sentencia de primera instancia, para ello, teniendo en cuenta que ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció frente al tema en sentencia del magistrado ponente, el dr JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ, SL4430-2018 - radicación n.º 54744; acta 38, calendada del diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la que se hace un análisis pormenorizado del contrato de aporte, en el cual retoma decisiones, del concejo de estado y de otra jurisprudencia sobre el mismo tema donde concluyó que se excluye de la aplicación en los contratos de aporte que suscribe el ICBF la figura jurídica contemplada en el artículo 34 del CST. Por lo que solicita que se acoja esta línea jurisprudencial y en aplicación de precedente vertical se absuelva al ICBF de toda responsabilidad.

2.3.2. ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE

Señaló que conforme el acervo probatorio se demostró que a través del trabajo realizado por las demandantes se desarrolló la actividad misional del ICBF, por lo cual, la sentencia condenatoria, en virtud de la solidaridad consagrada en el artículo 34 del CST, debe ser extendida al ICBF, argumentando expresamente que:

El decreto 1084 de 2015 – por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de inclusión social y reconciliación, reguló, en su título 3 – Las disposiciones específicas sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en su capítulo 2 – las disposiciones de contratación- estipulando en su artículo 2.4.3.2.10 el contenido del artículo 128 del decreto 2388-1979. El cual estipula:

ARTÍCULO 2.4.3.2.10. DE LAS CLÁUSULAS OBLIGATORIAS. Los contratos de aporte que el ICBF celebre para la prestación de los servicios de bienestar familiar solo están sujetos a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo

A dicho artículo, se le ha dado una lectura aislada, fundamentando con ello la improcedencia de la solidaridad al argumentar que, el contrato de aportes solamente está sujeto a las cláusulas obligatorias de los contratos administrativos y que en esas no se encuentra la de solidaridad.

Sin embargo, con ello se desconoce que, dentro de las cláusulas obligatorias de los contratos administrativos, están las cláusulas de garantía, y que expresamente el artículo 2.4.3.2.1 del Decreto 1084 de 2015 fija para quien funge como contratista en los contratos de aporte celebrados con el ICBF, la cuantía mínima del valor del amparo que deben prestar para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:

ARTÍCULO 2.4.3.2.1. CUANTÍAS. Fijense las siguientes cuantías mínimas en las garantías únicas que respalden el cumplimiento de los contratos de aporte que celebra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:

- 1. El valor del amparo del anticipo o pago anticipado debe ser equivalente al treinta por ciento (30%) del monto que el Contratista reciba a título de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie para la ejecución del mismo.*
- 2. El valor del amparo del cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al tres por ciento (3%) del valor del contrato.*
- 3. El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones será igual cuando menos al dos por ciento (2%) del valor total del contrato*

El anterior artículo, guarda armonía con lo consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y la reglamentación de la este contenida en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla las garantías que deben prestarse en todo contrato estatal, entre ellas, las relacionadas con salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

En conclusión, no tendría sentido que, de no aplicarse la solidaridad en los contratos de aporte, se hubiere exigido a la Asociación de Padres de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita, obtener una póliza de seguros, la cual adquirió con la compañía suramericana para cubrir un riesgo que solo se generaría con la aplicación de dicha figura, si esta no fuere procedente en esta tipología contractual.”

De otro lado indica que debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia T-21 de 2018, donde se analiza la figura de la solidaridad cuando la entidad ejecuta actividades relacionadas con las actividades misionales de la entidad pública.

Finalmente aduce que dentro del proceso se probó que a la terminación del contrato laboral a ninguna de las trabajadoras se les cancelaron salarios y prestaciones a los que tenían derecho por lo que no puede predicarse buena fe del empleador, sino por el contrario se prueba su actuar con mala fe, negligencia e indolencia al incumplir con sus obligaciones.

2.3.3. ALEGATOS SEGUROS GENERALES SURAMERICANA

Indica que debe revocarse parcialmente la sentencia que declaró solidariamente responsable al ICBF con la codemandada Asociación de padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita, toda vez que la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4430 de 2018, indicó que en este tipo de contratos era inexistente la solidaridad cuando analizó:

“La Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de analizar la naturaleza, contenido y alcance del contrato estatal de aportes que celebra el ICBF, definiéndole las siguientes características esenciales¹: i) es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993; ii) se trata de un negocio jurídico atípico, principal y autónomo; iii) oneroso, solemne y formal al igual que todos los contratos estatales, por cuanto se requiere que medie una contraprestación a favor del contratista; consta por escrito y debe estar suscrito por las partes, en los términos consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993; iv) es bilateral y sinalagmático, en la medida que se desprenden obligaciones y cargas para las dos partes del negocio, esto es, el aportante y el contratista; y v) es conmutativo, toda vez que las prestaciones contenidas en el negocio jurídico son equivalentes, puesto que el contratista asume la prestación de un servicio propio del sistema de bienestar familiar y social a cambio de una contraprestación, al margen de que el contratista pueda ser una institución sin ánimo de lucro. A los que esta Corte agrega que vi) el contratista asume la prestación del servicio público directamente a la comunidad mediante recursos del Estado. Es decir, el objeto del contrato se trata de una actividad sui generis regulada por normas especiales de derecho público y «solo están sujetas a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo», art. 128 del D.2388 de 1979, «actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución», art. 127 ibídem, lo que excluye la aplicación del artículo 34 del CST.” (subrayado fuera del texto)

Posición que ha sido acogida por el Tribunal Superior de Medellín en los siguientes procesos:

001310502120150045501 M.P. Hugo Alexander Bedoya
05001310500820160106301 M.P. Sandra María Rojas
05001310501720150126901 M.P. Diego Fernando Salas
05001310501720150036501 M.P. Martha Teresa Florez
05001310502220160079701 M.P. Nancy Gutierrez
05001310502220160100801 M.P. Victor Hugo Orjuela
05001310501420160088000 M.P. Luz Amparo Gomez A
05001310500920160132500 M.P. Luz Amparo Gomez A

Adicionalmente se han iniciado hasta la fecha 6 acciones de tutela en contra de decisiones del Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisión Laboral, todas ellas han sido negadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estas son:

11001020500020190166300
11001020500020200056900
11001020500020200057800
11001020500020210028900
11001020500020210029200
11001020500020210047100

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Conforme a los argumentos esbozados en el recurso de apelación se contrae a determinar si es procedente condenar al pago de salarios del 15 al 31 de julio de 2014 y si se debe condenar solidariamente al ICBF al pago de la sanción moratoria. Así mismo se analizará si es procedente conocer en grado jurisdiccional de Consulta lo desfavorable frente al ICBF según fue remitido el expediente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, el presente asunto fue remitido para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2018, donde además el a quo concedió el grado jurisdiccional de consulta frente al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para que se revisaran las condenas impuestas en su contra, por tratarse de una entidad estatal, ya que la misma no interpuso recurso de apelación, invocando lo dispuesto en el artículo 69 del C.P.T. y la S.S. Al ser recibido el proceso en esta instancia, por auto del 21 de enero de 2019 se ADMITIÓ el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la Consulta a favor del ICBF, en los términos en que había remitido por el juzgado.

Sin embargo ahora, al estudiar de fondo el proceso, se percata la Sala que se incurrió en un error al admitir la Consulta a favor del ICBF, pues frente a dicha entidad no era procedente tal grado jurisdiccional, como pasa a analizarse.

El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 dispone:

“ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”.

Cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.

También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior”.

Justamente la Corte Constitucional en sentencia C-424 del 8 de julio de 2015, al declarar la exequibilidad del artículo transcrito, preciso que:

“La Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del principio de consonancia en las sentencias de segunda instancia -artículo 35 de la Ley 712 de 2001- declaró su exequibilidad a través de la sentencia C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Adicionalmente, en dicha oportunidad, este Tribunal se refirió al grado jurisdiccional de consulta en los siguientes términos:

A diferencia de la apelación, la consulta no es un medio de impugnación sino una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. (Subraya fuera de texto)

La consulta es un mecanismo *ope legis*, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate.

La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un *grado jurisdiccional* que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado.” (Subraya fuera de texto)

En sentencia de tutela STL 7.382, Radicación N° 40.200 del 9 de junio de 2015, la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis frente a la interpretación de dicho artículo, indicando que el grado de consulta es obligatorio siempre que la sentencia sea totalmente adversa al trabajador, beneficiario o afiliado y no sea apelada y cuando la sentencia sea **simplemente adversa** a la Nación, Departamento, Municipio o entidad descentralizada respecto de la cual la Nación funja como garante, procediendo en éste último caso, con independencia de la formulación del recurso de apelación. En esta oportunidad señaló la Corte:

“(…) En ese orden, una conclusión surge diáfana: las normas en su primer inciso contienen unas reglas diferentes a las consagradas en el segundo, así:

- i) Para la procedencia de la consulta conforme el primer inciso se requiere: (a) que la sentencia sea totalmente adversa al trabajador, beneficiario o afiliado y (b) que no sea apelada por éste.

ii) Para la tramitación del referido grado jurisdiccional en los términos establecidos en el segundo inciso, basta con que la sentencia del a quo sea condenatoria -siendo indiferente si lo fue total o parcialmente-, e independientemente de que el fallo haya o no sido apelado -frente a todas o algunas de las condenas impuestas-, pues en todo caso opera la consulta, en tanto el colegiado de segundo grado tiene el deber de revisar, sin límites, la totalidad de las decisiones que le fueren adversas a La Nación, a las entidades territoriales, y descentralizadas en las que aquélla sea garante”.(subrayas fuera de texto)

Por tanto, cuando se trata de entidades descentralizadas, para determinar si procede el grado jurisdiccional de consulta es necesario determinar si la Nación es garante. Así lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela con SLT13192-2017 del 16 de agosto de 2017. Rad. 47930. MP GERARDO BOTERO ZULUAGA, cuando indicó:

“Así mismo, es pertinente destacar que desde entonces se ha decantado sobre el rigor jurídico que los operadores judiciales deben ejercer al momento de decidir si en un determinado caso es procedente o no surtir el grado jurisdiccional, labor que implica auscultar las distintas prerrogativas que posicionen a la Nación como garante de las obligaciones de las entidades descentralizadas”

Según lo ha analizado la Corte en diversas providencias, la Nación actúa como garante frente a entidades descentralizadas, cuando estas se encuentran proceso de liquidación o ya se encuentran liquidadas, casos en los que las normas reglamentarias disponen que al agotarse los recursos del patrimonio autónomo o entidad en liquidación, la Nación responderá por las respectivas acreencias y en el caso de COLPENSIONES, dado que recibe recursos del Presupuesto General de la Nación, por conducto del Ministerio del Trabajo, para el pago de las prestaciones a su cargo, como una forma en que el Estado contribuye a garantizar la protección de los recursos pensionales y la sostenibilidad financiera del sistema.¹

Aunado a lo anterior, en múltiples ocasiones la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la improcedencia del grado jurisdiccional de consulta en tratándose de sentencias de primera instancia adversas a entidades distintas a las que en los precisos términos del artículo taxativamente individualizo, advirtiendo que en esos casos el Tribunal carecía de competencia funcional para proferir un fallo. Entre ellas se destaca la del 10 de febrero de 2009, radicación 31.961 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza donde adujo que:

“En los tres cargos que se presenta, el impugnante le censura al tribunal que asumiera el grado jurisdiccional de consulta, pese a que no se daban los requisitos para ello, dada la naturaleza jurídica de la entidad convocada a pleito. Al discurrir de esa forma, en realidad, y como lo ha explicado la Corte en situaciones análogas a la que convoca ahora su atención, se pretende subsanar irregularidades procesales que debieron corregirse en las instancias, bien por el juzgado de conocimiento interponiendo los recursos pertinentes contra la decisión que ordenó la consulta de la sentencia de primer grado o solicitando al Tribunal que se abstuviera de desatlarla por falta de competencia para ello.”

¹ Sentencia STL 4255, radicado 51237 de 2013

Así mismo la Corte ha analizado que no resulta procedente este grado jurisdiccional por no existir mandato expreso que disponga la calidad de garante de la Nación frente a la entidad. Tal es el caso de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, aspecto analizado en sentencias como la STL4419-2017 y STL13192-2017, en las que se señaló:

“De lo anterior se desprende que si bien de su naturaleza jurídica emana que es una entidad descentralizada, lo cierto es que no se avizora evento en el que la Nación actúe como garante de las obligaciones de la entidad aseguradora, máxime cuando no existe mandato expreso que así lo disponga; surge entonces indiscutible que no debía surtir el grado jurisdiccional de consulta, en la medida que no se cumplen los presupuestos consignados en el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, que modificó el 69 del C.P.T. y S.S., tal como lo decidió el *Ad quem*.”

En el caso del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 75 de 1968, modificada por la Ley 7ª de 1979 es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, es decir, que se trata de una entidad descentralizada, por lo no se acreditan los presupuestos de orden legal y jurisprudencial previamente analizados, para afirmar que la Nación sea garante.

Además, no existe disposición legal alguna en la que se disponga que la Nación sea garante de las acreencias y obligaciones a cargo del ICBF, y por ello, el simple hecho de que se trate de una entidad de derecho público no puede servir de argumento para sustentar la procedencia del grado jurisdiccional de consulta sobre la sentencia parcialmente condenatoria que puso fin a la primera instancia.

En consecuencia se dejará parcialmente **SIN EFECTO el AUTO** del 21 de enero de 2019 en cuanto admitió la consulta frente al ICBF y **se ABSTENDRÁ de conocer dicho grado jurisdiccional** por no ser procedente respecto a dicha entidad.

De otro lado, en cuanto a los temas objetos del recurso de alzada, pasa la Sala a analizar si a las demandantes les asiste derecho al pago del salario del 15 de julio al 31 de julio de 2014, dado que el juez lo negó porque a su juicio con lo dicho por la testigo AMANDA ARBOLEDA se había acreditado que a las actoras les habían pagado hasta el 31 de julio de 2014, mientras estas aseguran que dicha quincena no les fue cancelada.

Pues bien, debe recordarse que en materia probatoria, es principio general, que quien invoca un hecho, respecto del cual aspira a derivar consecuencias jurídicas, debe acreditarlo, salvo los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas, casos en los cuales, la misma ley dispone la inversión de carga de la prueba o cuando según las circunstancias en causa, haya lugar a

ordenar judicialmente una suerte de prueba compartida o dinámica. Así lo dispone el artículo 177 del CPC hoy artículo 167 del CGP cuando indica que:

CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

De la norma anterior, se desprende que cuando en los hechos de la demanda se plantea una negación indefinida, como el incumplimiento en los pagos, no requiere demostración, y por tanto, se traslada a la parte demandada la carga de desvirtuar su supuesto incumplimiento.

Así lo ha analizado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 13324 -2017 radicado 51001 del 29 de agosto de 2017, cuando indicó:

“No obstante, no está de más señalarle al recurrente que no hubo tal afirmación indefinida, la demandante activó el aparato judicial con la pretensión de que se declare judicialmente la existencia de una obligación insoluta a cargo del demandado, lo que lleva una negación indefinida ínsita, cual es que no le han pagado, no puede el demandado, a su vez, responder con una afirmación indefinida, salvo que dentro del juego de carga de prueba no sea el llamado a probar. En este caso, quien ha pagado debe demostrar su cumplimiento, por cualquier medio admisible de prueba, como el documento contentivo de la transacción bancaria, documento que en el *sub lite* ha brillado por su ausencia.”

Y en sentencia SL5200-2019 Radicación n.º 69191 del 26 de noviembre de 2019 señaló:

“Tampoco puede perderse de vista que cuando el demandante negó que se le hubieran consignados sus cesantías en un fondo, ese hecho configuró una negación indefinida, la cual no puede acreditarse materialmente por quien la alega, en este caso el accionante, evento en el que la carga de la prueba de desvirtuar dicha situación corresponde a la demandada pues es quien realmente puede demostrar que, si cumplió con su obligación, de consignar el auxilio de cesantía durante la relación laboral, en los términos estipulado por la ley, es decir, antes del 15 de febrero del año siguiente a su causación.”

En el caso de autos, en el hecho décimo séptimo del libelo genitor, las demandantes afirman que la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR CAPERICITA cesó el pago en los pagos y prestaciones sociales a partir del 16 de julio de 2014, por lo que al tratarse de una afirmación indefinida, a quien correspondía demostrar que efectuó el pago de salarios y prestaciones más allá de esta fecha era a la demandada y no a la parte actora, como pareció entenderlo el a quo.

Por tanto, como la demandada no allegó ninguna prueba que demuestre que efectivamente realizó el pago a las demandantes del salario del 16 al 31 de julio de 2014, este hecho no puede darse por probado por la sola afirmación de la señora AMANDA ARBOLEDA, testigo traída por las demandantes, ya que no hay ninguna prueba que respalde tal afirmación, además de que se contradice con lo afirmado por las demandantes en su interrogatorio, pues ninguna confesó haber recibido este pago, sino que por el contrario todas coincidieron en afirmar que el último pago que les hicieron fue el 15 de julio de 2014.

Así las cosas, estima la Sala que es procedente **MODIFICAR** la sentencia en este punto, ADICIONANDO el numeral tercero, en cuanto se deberán incluir dentro de las sumas a reconocer a las demandantes el salario del 16 al 31 de julio de 2014, así:

GABRIELA DE JESUS GALLEGO ORREGO	\$ 308.000
MARÍA EUGENIA ZAPATA CASTRO	\$ 458.500
MÓNICA MARÍA HERRERA ORTIZ	\$ 458.500
LUZ MARÍA RESTREPO RAVE	\$ 458.500
MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ OSSA	\$ 308.000
SANDRA CRISTINA ZAPATA RAMÍREZ	\$ 458.500
GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ZAPATA	\$ 308.000
KAREN PAOLA OSPINA RAMÍREZ	\$ 515.000

De otro lado en cuanto a la solicitud del apoderado de las demandantes de que se condene en forma solidaria al ICBF al pago de la sanción moratoria, considera la Sala que dicha pretensión no está llamada a prosperar por las siguientes razones:

Conforme se aprecia en a folios 195/255 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el objeto de atender a la primera infancia en el marco de la estrategia “DE CERO A SIEMPRE celebró un contrato de aportes con la Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil Caperucita y ésta, actuando como contratista de aquel y para el desarrollo del objeto convenido, vinculó, mediante contrato individual de trabajo a las demandantes, quienes en razón de la

naturaleza de su empleador, como entidad sin ánimo de lucro de beneficio social vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, adquirieron la calidad de trabajadoras particulares.

Si bien es cierto, que existe una similitud entre las actividades y responsabilidades legales del ICBF y el objeto social de la asociación de padres de familia accionada, además que las funciones y actividades realizadas por las demandantes, estaban relacionadas con la prevención y protección integral de la primera infancia, no puede perderse de vista que el artículo 127 del Decreto 2388 de 1979 expresamente dispone que en el contrato de aportes la responsabilidad se cumple bajo la responsabilidad exclusiva de la institución, por lo que no puede predicarse solidaridad con el ICBF, como se lee:

*“Artículo 127. Por la naturaleza especial del servicio de bienestar familiar, el ICBF podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal cuando el instituto se obliga a proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc) indispensables para la prestación total o parcial del servicio, **actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución**, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, su vigencia será anual, pero podrá prorrogarse de año en año. (Negrillas fuera de texto)*

Por otra parte, el artículo 128 ibidem dispone:

*“ARTÍCULO 128. Los contratos de aporte que el ICBF celebre para la prestación de los servicios de bienestar familiar solo están sujetos a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo.
El Instituto también podrá celebrar contratos innominados y de carácter mixto”.*

Frente al contrato de aportes, ha tenido la oportunidad de pronunciarse el Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, en sentencia del 30 de junio de 2016, radicado 2082765, la cual fue citada por la Corte Constitucional en Sentencia SU 273 de 2019, al resolver un asunto de madres comunitarias que solicitaban el reconocimiento de una relación laboral frente al programa de hogares comunitarios, indicando que:

“(…) el contrato de aporte es una clase de convención atípica encaminada a que el ICBF -en virtud de su función de propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteja al menor de edad y le garantice sus derechos- suscriba con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo (...)

El objeto de todo contrato de aporte es la provisión o entrega de bienes del ICBF a otra institución que se encarga de prestar el servicio público de bienestar familiar, a diferencia del contrato de prestación de servicios. (...)

El ingreso al sistema nacional de bienestar familiar no depende del acto de creación de la persona jurídica que presta el servicio de forma indirecta, sino de la prestación que esta realiza a partir de sus obligaciones contractuales. No se desprende de una formalidad, sino de la puesta en marcha de

actividades que, bajo la dirección, vigilancia y control del ICBF, satisfagan la necesidad tantas veces mencionada de protección de la población infantil y de las familias en situación de vulnerabilidad”.

Al respecto también se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, órgano de cierre en la especialidad laboral, en sentencia SL-4430-2018, radicación 54744 del 10 de octubre de 2018, cuando indicó:

“De la norma superior pre trascrita se desprende que la modalidad de servicio público asumida por el Estado colombiano, implica que su prestación ha de hacerse conforme al régimen jurídico que fije la ley y que, si bien puede ser prestado directa o indirectamente por aquel o por particulares, en todo caso el Estado conserva la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios. En ese orden, la posibilidad constitucional de que los particulares sean encargados de la prestación de un servicio público y las condiciones en que lo pueden hacer son las que señale la ley. Así las cosas, bien puede el legislador para efectos de la prestación de un servicio público -con base en el nl. 23 en concordancia con el inciso final del artículo 150 de la Constitución - autorizar a las entidades estatales designadas como responsables de la prestación del servicio público para celebrar los contratos pertinentes, como lo hizo de tiempo atrás el nl. 9º del artículo 21 de la Ley 7 de 1979, por la cual se dictan las normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones. Siendo a su vez reglamentado por el D. 2388 de 1979, en cuyo artículo 127 consagró los contratos de aportes, como el que ligó a los aquí codemandados, cuya celebración debe estar acorde con el 128 ibídem.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de analizar la naturaleza, contenido y alcance del contrato estatal de aportes que celebra el ICBF, definiéndole las siguientes características esenciales : i) es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993; ii) se trata de un negocio jurídico atípico, principal y autónomo; iii) oneroso, solemne y formal al igual que todos los contratos estatales, por cuanto se requiere que medie una contraprestación a favor del contratista; consta por escrito y debe estar suscrito por las partes, en los términos consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993; iv) es bilateral y sinalagmático, en la medida que se desprenden obligaciones y cargas para las dos partes del negocio, esto es, el aportante y el contratista; y v) es conmutativo, toda vez que las prestaciones contenidas en el negocio jurídico son equivalentes, puesto que el contratista asume la prestación de un servicio propio del sistema de bienestar familiar y social a cambio de una contraprestación, al margen de que el contratista pueda ser una institución sin ánimo de lucro. A los que esta Corte agrega que vi) el contratista asume la prestación del servicio público directamente a la comunidad mediante recursos del Estado. Es decir, el objeto del contrato se trata de una actividad sui generis regulada por normas especiales de derecho público y «solo están sujetas a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo», art. 128 del D.2388 de 1979, «actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución», art. 127 ibídem, lo que excluye la aplicación del artículo 34 del CST.”

Posición reiterada en la sentencia SL2370-2021 radicado 72592 del 9 de junio de 2021 donde se señaló:

“Según el artículo 127 del Decreto 2388 de 1979, del que se sirvió el fallador de la alzada para edificar su reflexión, el contrato de aporte celebrado por el ICBF conlleva que la entidad provea a una institución de utilidad pública o social los bienes (edificios, dineros, etc.) necesarios para la prestación total o parcial del servicio. Dicha «actividad (...) se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar».

Esta Corporación ya se ocupó de desestimar la posibilidad de que se configure responsabilidad solidaria del ICBF por las obligaciones laborales generadas a cargo de administradores de hogares infantiles, en el marco de un contrato de aporte. Así lo explicó en sentencia CSJ SL4430-2018:

(....)

Así las cosas, no existe duda de que las reglas que gobiernan el contrato de aporte son aplicables a todas las actividades propias del servicio, incluidas la administración y cuidado de los bienes entregados para tal propósito. De ahí que el prestador del servicio responde por las obligaciones surgidas el personal que vincula para ejecutar el objeto contractual, como lo concluyó el juez plural. De esta suerte, no tiene cabida la responsabilidad solidaria que se reclama, en vista de la especial naturaleza del contrato de aporte que ligó a los codemandados, cuya celebración y vigencia no se encuentra en discusión.”

Por lo tanto concluye la Sala que si en las cláusulas obligatorias del contrato administrativo de aportes celebrado entre el ICBF y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA, no se incluyó expresamente la solidaridad el art. 34 del CST, frente al pago de salarios, prestaciones sociales, y demás acreencias laborales, que la referida asociación eventualmente le quedare adeudando a sus propios trabajadores subordinados, mal haría el operador jurídico incluirla, a sabiendas de que la misma por expresa disposición legal resulta inaplicable frente a este tipo de contratación, además de que no existen argumentos para apartarse del precedente jurisprudencial de nuestro órgano de cierre que ha estimado que en este tipo de contratos no existe solidaridad, estima la Sala que es dable CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en cuanto ABSOLVIÓ al ICBF de la solidaridad frente a la sanción moratoria, aclarando que si bien el ICBF fue condenado a pagar en forma solidaria los salarios y prestaciones adeudados a las demandantes, dicha entidad no interpuso recurso de apelación y como se analizó en precedencia no procede el grado jurisdiccional frente a la misma por lo que se carece de competencia para pronunciarse frente a dicha condena.

En consecuencia la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA PARCIALMENTE con las modificaciones a que se hizo referencia.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 15 de agosto de 2018 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por las señoras **KAREN PAOLA OSPINA RAMÍREZ, GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ZAPATA, MARÍA EUGENIA ZAPATA CASTRO, MÓNICA MARÍA HERRERA ORTIZ, LUZ MARÍA RESTREPO RAVE, MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ OSSA, SANDRA CRISTINA ZAPATA RAMÍREZ Y GABRIELA DE JESÚS GALLEGU ORREGO** contra la **ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL CAPERUCITA** y el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: MODIFICIA la sentencia **ADICIONANDO** el numeral **tercero**, en cuanto se deberán incluir dentro de las sumas a reconocer a las demandantes el salario del 16 de julio al 31 de julio de 2014, adeudándoles, además de los valores reconocidos por el a quo, los siguientes:

GABRIELA DE JESUS GALLEGU ORREGO	\$ 308.000
MARÍA EUGENIA ZAPATA CASTRO	\$ 458.500
MÓNICA MARÍA HERRERA ORTIZ	\$ 458.500
LUZ MARÍA RESTREPO RAVE	\$ 458.500
MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ OSSA	\$ 308.000
SANDRA CRISTINA ZAPATA RAMÍREZ	\$ 458.500
GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ZAPATA	\$ 308.000
KAREN PAOLA OSPINA RAMÍREZ	\$ 515.000

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **KAREN OSPINA RAMIREZ Y OTROS**
Demandados: **ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL
HOGAR INFANTIL CAPERUCITA -INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR**
Llamado en garantía: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA:**
Radicado No.: **05001-31-05-021-2015-01306-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **21/10/2022**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **24/10/2022** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario